

Latin American Program | March 2017

Fuente: Scipio / Flickr / Creative CommonsXXX

Violencias y criminalidad en las principales ciudades andinas

Desafíos y recomendación de políticas públicas

Lucía Dammert

PRESENTACIÓN

El aumento de la violencia, la presencia del crimen organizado y la aparente incapacidad gubernamental para enfrentar estos problemas se han convertido en uno de los principales ejes de análisis del contexto que se vive actualmente en América Latina. Las noticias diarias están llenas de homicidios, femicidios, masacres, revueltas penitenciarias y desapariciones vinculadas con la presencia de grupos criminales organizados que se disputan el control de los mercados ilegales que se han conformado en la región. Estos grupos criminales se relacionan principalmente con el negocio de la droga, pero han ido transformando su mercado de forma flexible en los últimos años, incluyendo un fuerte crecimiento de la presencia de la minería ilegal, la tala ilegal, el tráfico de migrantes y la trata principalmente de niñas y mujeres, entre otras actividades.

A pesar de que la calidad de la información es aún débil, las tasas de homicidio en América Latina están entre las más altas del mundo. De hecho, diversas fuentes estiman que algunas ciudades como Tegucigalpa, Caracas y San Salvador tienen tasas que superan cualquier record nacional. Esta situación ha generado la preocupación mundial, especialmente sobre los países donde esta situación se presenta en mayor magnitud. Sin embargo, incluso en aquellos países considerados seguros como Costa Rica y Chile, se puede observar la presencia de territorios con alta concentración de violencia homicida. Es decir, los homicidios no se distribuyen aleatoriamente en el territorio; por el contrario, tienen patrones territoriales concentrados y altamente focalizados.

***Esta investigación fue posible gracias al apoyo del CAF-Banco de Desarrollo de América Latina.**

La situación en México tiene especial relevancia debido a la aparente pérdida de control territorial por parte del gobierno mexicano. Es decir, en algunos territorios en México el Estado no sólo está ausente, sino que otras organizaciones han ocupado su lugar o lo han erosionado con prácticas de amedrentamiento y corrupción. En estos lugares, las desapariciones, las torturas y la corrupción institucional son la norma más que la excepción.

Cualquier análisis sobre el contexto de violencia e inseguridad en estos países requiere de una perspectiva histórica, institucional, social y económica. En las últimas dos décadas, un factor común está presente en la región: el tráfico de drogas y las políticas que se han implementado para enfrentarlo. Ésta es una actividad ilegal que estaría presente en la base de los múltiples procesos de deterioro institucional, así como de violencia territorial que no sólo se circunscribe al tránsito de drogas ilícitas hacia los Estados Unidos de América, sino también a la disputa por los emergentes mercados internos.

La cocaína se ha convertido en un actor clave para empezar a entender los procesos de violencia que se observan en partes importantes de la región. Dicha

La cocaína se ha convertido en un actor clave para empezar a entender los procesos de violencia que se observan en partes importantes de la región.

cocaína sale principalmente de Colombia, Perú y Bolivia, países que, dependiendo de la fuente y el año, se ubican en los primeros lugares del mundo en producción. A pesar de esta preeminencia en el rol de producción, es decir, de colocarse en el inicio del desarrollo del mercado ilegal, Perú y Bolivia no presentan indicadores especialmente altos de homicidio u otros hechos de violencia criminal. Esta situación no ha sido analizada en detalle en ambos contextos nacionales, debido a la carencia de información rigurosa pero también a la reciente emergencia de una temática donde la experticia es aún incipiente.

Esta paradoja se encuentra en la base del proyecto realizado por el Programa Latinoamericano del Woodrow Wilson Center (en adelante WWC) y auspiciado por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) durante el año 2016. Este proyecto tuvo como objetivo avanzar en el conocimiento de la situación de violencia e inseguridad en Perú, Bolivia y Ecuador, países que han recibido limitada atención pero que juegan importantes roles en la producción, tráfico y consumo de cocaína en América Latina.

El desarrollo del proyecto involucró la realización de dos seminarios internacionales en las ciudades de Quito y Lima con la presencia de especialistas de Bolivia, Colombia, Chile y Estados Unidos, además de los expertos y actores de política pública de cada uno de los países sede. Los seminarios buscaron el debate abierto, así como la identificación de desafíos y caminos a seguir para enfrentar la especificidad de las problemáticas locales y regionales¹. Adicionalmente, se desarrollaron documentos de diagnóstico de cada una de las ciudades capitales que relevan la multidimensionalidad de los fenómenos que se tratan de analizar, así como la incapacidad para generar una respuesta única a un problema que atraviesan



Fuente: DiNo / Flickr / Creative Commons

múltiples niveles de la sociedad y el Estado de cada país. Gabriela Reyes Rodas en La Paz, Nicolás Zevallos y Jaris Mujica en Lima, y Fernando Carrión en Quito ponen el acento en las particularidades urbanas, institucionales, sociales y culturales que caracterizan el fenómeno de la violencia y la inseguridad.

El objetivo del presente documento es identificar los avances y desafíos en la temática de la violencia y la inseguridad en Perú, Ecuador y Bolivia, así como proponer algunos ejes fundantes de iniciativas de política que pudieran servir para aumentar la seguridad de sus habitantes. Se pone especial énfasis en el contexto de las ciudades capitales y su situación de inseguridad y criminalidad.

CRECIMIENTO ECONÓMICO CON PRECARIEDAD

La década pasada fue de América Latina debido al crecimiento sostenido de sus economías y la multiplicación de programas sociales que lograron disminuir efectivamente la población indigente y reducir la línea de pobreza. De hecho, el considerado milagro latinoamericano vinculado con esta disminución y su correlativo crecimiento de la clase media, quien ahora goza mayores accesos a bienes y servicios, se evidenció en prácticamente todos los países de la región. Perú, Ecuador y Bolivia no fueron la excepción. No obstante la diversidad de los indicadores y magnitudes de cambio, es innegable que la década pasada trajo beneficios económicos para muchos ciudadanos que previamente vivían en economías de subsistencia.

Las ciudades latinoamericanas también vieron diversos frutos de este proceso de crecimiento económico y social, incluyendo el aumento de la cobertura de las redes de agua, alcantarillado y luz. Además, la urbanización de América Latina es un fenómeno imparable que ha consolidado gigantes metrópolis, así como importantes ciudades intermedias que albergan hoy a la mayoría de los ciudadanos latinoamericanos.

Sin embargo, el milagro se construyó sobre sociedades con altos niveles de desigualdad de ingresos y oportunidades cuyas estructuras no fueron modificadas. Algunos elementos que se mantienen constantes son:

- Jóvenes que **no trabajan ni estudian**
- **Desempleo abierto** en poblaciones específicas
- **Informalidad económica**
- Territorios marcados como **guetos de exclusión**
- **Altos niveles de inequidad** en la distribución del ingreso
- **Baja calidad** de la cobertura de salud y educación pública
- **Baja inversión** en ciencia y tecnología

Este proceso de crecimiento económico, que parece afectar a todos pero que más bien consolida la exclusión de algunos, propicia un terreno amplio para desarrollar los mercados y actividades ilegales. Cabe mencionar que los más vulnerables han sido objeto de las políticas de seguridad, por lo que están sobrerrepresentados en hacinadas poblaciones carcelarias donde el castigo se torna en un arma de doble filo al potenciar carreras criminales.

¿VIOLENCIA URBANA O URBANA VIOLENCIA?

A pesar de que los casos analizados representan países donde el sector rural ha tenido un rol más que relevante en las últimas décadas, el proceso de urbanización es imparable. En los tres casos es en ciudades donde habita la mayoría de los habitantes de Perú, Ecuador y Bolivia, y la tendencia de aumento es sostenida. De esta forma, la inicial separación entre delitos o violencias urbanas y rurales empieza a debilitarse en términos de su relevancia y más bien trae un caleidoscopio de compleja revisión. Es decir, en cada ciudad se torna clave poder revisar su conformación territorial, así como sus dinámicas de violencia y criminalidad.

Las ciudades de Lima, La Paz y Quito son las capitales de sus países, pero no parecen ser ejes centrales en la ruta de la droga. De hecho, en los tres países se mencionan ciudades ubicadas en las fronteras (terrestres o marítimas) como aquellas donde se consolida el proceso de tráfico y que también evidencian los principales aumentos en la presencia de hechos de violencia homicida.

La conurbación de las ciudades es un fenómeno relevante que amplía la mirada respecto a la presencia de

Las ciudades de Lima, La Paz y Quito son las capitales de sus países, pero no parecen ser ejes centrales en la ruta de la droga.

grupos criminales en la lucha por el manejo del mercado ilegal en la ciudad. De esta manera, analizar “La Paz” sin incluir “El Alto” se convierte en una perspectiva especialmente limitada que puede llevar a conclusiones contradictorias. Lima, una de las ciudades más pobladas de la región, presenta múltiples centralidades que funcionan con altos niveles de independencia.



Fuente: Alex Proimos / Flickr / Creative Commons

La información disponible permite confirmar que las ciudades capitales no juegan un rol principal en el mapa del movimiento de las drogas distribuidos hacia otros países, pero quedan dudas sobre la posible presencia de procesos de lavado de activos. Lamentablemente, en los tres países analizados son pocos los casos investigados sobre este tipo delictual, dejando en evidencia que el dinero que genera el tráfico es blanqueado en industrias tan variadas como los espectáculos deportivos, la construcción y el turismo. De esta forma, una de las interrogantes aún sin respuesta en los países analizados se centra en el destino del dinero generado por los mercados ilegales, dado que los detenidos y acusados por delitos de tráfico de drogas son principalmente vendedores callejeros encontrados con pequeñas cantidades de dinero y droga.

El homicidio no es un indicador único para describir el fenómeno de la violencia en un determinado territorio. El análisis de la información disponible en las tres ciudades y sus entornos evidencian niveles de victimización que superan el 30 por ciento por delitos comunes como robo, asalto y otros considerados de connotación social. Esta situación va de la mano con la percepción de inseguridad que tienen los habitantes de estas ciudades que consideran que viven una “ola de inseguridad”.

De esta forma, el presente reporte entrega un panorama general sobre la violencia y la criminalidad en las ciudades capitales de Perú, Ecuador y Bolivia, pero evidencia la necesidad de análisis territoriales más específicos que permitan identificar los problemas que enfrentan sus habitantes de forma cotidiana.

LA IMPORTANCIA DE LOS EJES TRANSNACIONALES

La criminalidad organizada tiene fuertes ribetes transnacionales. En las tres ciudades analizadas se muestran articulaciones de redes urbanas, así como sistemas de organización territorial que traspasan fronteras. Tanto los traficantes de drogas como las redes que llevan a cabo la trata y el tráfico de migrantes, la tala y minería ilegal, utilizan ciudades de frontera, puertos y zonas abiertas para el desarrollo de sus actividades.

La presencia de grupos criminales con conexiones internacionales es indiscutible, pero cuantificar su importancia es una tarea más bien especulativa dada la carencia de información sólida. Su cuantificación ha sido utilizada como una forma de justificar algunos programas de intervención especialmente policial, así como la reforma de los procesos de justicia penal en proceso en diversos países de la región.

VICTIMIZACIÓN, MIEDO Y FALTA DE CONFIANZA INSTITUCIONAL

A pesar de las dificultades para obtener información sólida en este tema, es importante resaltar que en los tres casos analizados se cuenta con encuestas de victimización que permiten por lo menos establecer una línea de análisis. Dadas las diferencias en la metodología, fecha de realización y cobertura territorial se torna imposible comparar los casos. Sin embargo, se puede afirmar:

- La **victimización por delitos contra la propiedad y las personas** es más alto que hace una década.
- En los últimos años **la tendencia de incremento de los niveles de denuncia por delitos** se ha estancado o incluso retrocedido.
- **Los niveles de denuncia** varían por tipo delictual, pero en agregado en los tres casos son especialmente bajos.

Lamentablemente, la información policial disponible no permite elaborar un análisis más completo que confronte ambos registros para tratar de estimar la verdadera prevalencia de hechos delictuales. Sin embargo, parece claro que se requiere de información con desagregación territorial para definir políticas locales más efectivas. Más que desarrollar encuestas a nivel local (que muchas veces carecen de seguimiento y por ende se convierten en esfuerzos aislados y esporádicos), se requiere construir un sistema de información policial de alta calidad que permita conocer las dinámicas geográficas y temporales del delito. Hay avances, como se verá en una sección posterior, pero los mismos requieren también procesos de transparencia de información, así como el diseño colaborativo de procesos de investigación que apoyen la toma de decisiones de política pública.

Más allá de los niveles de victimización e incluso de la tendencia que ésta toma en el tiempo, la ciudadanía está atemorizada. Las encuestas son inequívocas. En todos los casos analizados, la seguridad está entre los primeros lugares de preocupación ciudadana, las personas se sienten carentes de protección y muchas veces desconfían de las instituciones que deberían protegerlas. Esta situación es un verdadero problema para las políticas públicas, que muchas veces se analizan como fracasadas por un reclamo popular más bien constante.

Sin embargo, en la mayoría de los países, tanto desarrollados como en vías de desarrollo, el miedo existe como fenómeno social independiente de la victimización. En otras palabras, puede que las políticas de seguridad que se implementen sean eficaces en prevenir y

controlar el delito, pero estos resultados aparecen con claridad hasta el mediano plazo; mientras tanto, el temor es un fenómeno que debe ser enfrentado en el corto plazo.

Ahora bien, no hay estudios que nos permitan afirmar cuál de los factores juega un rol principal en los niveles de temor ciudadano. En algunos casos puede ser el rol de la cobertura de medios de comunicación sobre hechos de violencia o la sensación de impunidad por baja efectividad de la justicia o la percepción de corrupción de las policías. Es importante recalcar un factor presente en los tres países y ciudades que se han analizado: populismo punitivo.

Algunos elementos que sin duda influyen en la percepción ciudadana de ansiedad e inseguridad son los siguientes:

- **El permanente debate político-electoral** centrado en la incapacidad de uno u otro sector para enfrentar el problema del crimen;
- **La creatividad sin límites** de algunos comandos de campaña que proponen desde la pena de muerte hasta el servicio militar obligatorio; y
- **La creación de leyes** que aumentan castigos y crean tipos delictuales de forma cotidiana.

La carencia de estudios que permitan identificar el rol de estos factores en la sensación de inseguridad es transversal en los tres casos analizados; pero se puede afirmar que la desconfianza institucional es otro elemento común en éstos. La información disponible confirma un panorama marcado por la percepción de ineficacia, corrupción e incluso abuso por parte de las instituciones policiales y de justicia. Esta desconfianza ciudadana en aquellos que deberían estar encargados de brindarles protección y justicia tiene consecuencias evidentes en la consolidación de mecanismos ciudadanos de autoprotección, que van desde colocación de infraestructura para limitar el libre paso de personas y vehículos en ciertas calles y horarios hasta

Los mecanismos ciudadanos de autocuidado caminan sobre una tenue línea que divide el accionar legal del ilegal.

la conformación de autodefensas que toman la justicia en mano propia. Los mecanismos ciudadanos de autocuidado caminan sobre una tenue línea que divide el accionar legal del ilegal, debido al uso de armas o entrega de castigos que se consideran parte de las respuestas frente al crimen.

Todo lo anterior ha consolidado un proceso de incremento exponencial de la industria privada de seguridad, que en algunos países incluye la contratación de guardaespaldas con capacidad de porte de armas de grueso calibre, el blindaje de vehículos y la protección de bienes muebles. La información sobre el tamaño de la industria varía en cada país analizado e incluye una creciente informalidad en muchas de sus actividades. El elemento común es la carencia de una efectiva regulación de la industria, lo que en muchos casos puede traer de la mano mayor sensación de inseguridad.

NECESIDAD DE NUEVOS INDICADORES

En América Latina tenemos aún problemas para desarrollar indicadores que muestren la complejidad de los fenómenos vinculados a la violencia y criminalidad. Aún se toman los decomisos de droga, la desactivación de laboratorios y los detenidos como indicadores ciertos de la capacidad institucional para enfrentar el crimen, especialmente aquel vinculado con el tráfico de drogas. Sin embargo, los mismos revisten diversas e incluso contradictorias interpretaciones. ¿Se decomisa más porque se está sacando más droga de la calle o porque hay más droga en la calle? Ésta es una de las interrogantes aún pendientes en la región, y los países andinos no son una excepción.

De hecho, en los tres casos analizados se entrega información oficial que recae en los indicadores antes mencionados, así como en algunos casos en denuncias policiales, lo que muestra sólo una parte del problema. Además, es necesario reconocer que son indicadores de resultado vinculados a la acción policial. En otras palabras, cuando la policía se pone como meta el decomiso de drogas, el mismo aumenta, o cuando la policía sale a patrullar las calles buscando personas con temas pendientes con la justicia, generalmente encuentra a muchos más que sólo patrullando las calles.

Por ende, es necesario implementar un set de indicadores vinculados con el tráfico de drogas en particular y el crimen organizado en general que nos permitan interpretar de mejor manera su magnitud y cambios en el tiempo.

CRISIS PENITENCIARIA INVISIBLE: REALIDAD Y CONSECUENCIA

El aumento de los castigos y el uso constante de la prisión preventiva ha consolidado un aumento sostenido de la población reclusa en Perú, Bolivia y Ecuador. Generalmente vinculados al tráfico de drogas, en muchos casos microtráfico, cientos son las personas que fortalecen su relación con las drogas, la violencia y la criminalidad al interior de sistemas carcelarios que sólo pueden ser descritos como en crisis.

La incapacidad estatal para generar castigos alternativos al encarcelamiento, así como de programas de rehabilitación penitenciaria y postpenitenciaria, es uno de los elementos para entender como las cárceles irónicamente se han convertido en espacios administrados por la criminalidad. En dichos espacios, el contagio criminal es permanente y la posibilidad de vinculación con redes criminales que brindan protección dentro y fuera del establecimiento es casi completa.

La información es muy limitada de los problemas que enfrentan los infractores de ley que se encuentran al interior de los recintos carcelarios. Sin embargo, múltiples estudios enfatizan



Fuente: Mikel / Flickr / Creative Commons

que los niveles de consumo problemático de drogas son especialmente altos. Este consumo redunda en altas probabilidades de cercanía con organizaciones criminales vinculadas con su tráfico dentro y fuera del país.

Se debería entregar especial atención al incremento sustancial de mujeres privadas de libertad por su vinculación con tráfico de drogas. A pesar de que son un porcentaje menor de la población penitenciaria, las mujeres privadas de libertad han aumentado su presencia dejando una estela de abandono en las familias, y especialmente los hijos, que estaban bajo su supervisión. En consecuencia, se ha generado una rotación familiar en la administración del negocio vinculado con la venta de drogas. Creer que encerrar a una mujer microtráficoante de drogas es una forma de terminar con la venta, es literalmente tapar el sol con un dedo. Las iniciativas formuladas en países desarrollados ponen énfasis en la protección de la familia del privado de libertad, en la limitación del uso de la prisión preventiva y en aquellos casos donde hay sentencia efectiva en el desarrollo de programas de reintegración postpenitenciario de largo aliento.

Lamentablemente, en los casos analizados, el problema penitenciario aparece más bien como una solución centrada en el castigo de leyes consideradas “duras” a nivel internacional. La cárcel se ha convertido entonces en un espacio invisible para el debate cotidiano, pero marcado por el hacinamiento, la violencia interna y la incapacidad real de rehabilitar a los infractores de ley. La información es clara: en América Latina, y especialmente en los países analizados, la mayoría de las personas privadas de libertad están esperando condena, se vinculan a hechos de tráfico de drogas, no son reincidentes y en muchos casos tienen problemas de salud mental y consumo problemático de drogas. De esta forma, el ingreso al sistema carcelario constituye un hito en la carrera criminal de un individuo que la mayoría de las veces fortalece su vinculación con la violencia y el mundo del delito.

AUMENTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

La preocupación ciudadana por la seguridad ha venido de la mano de más inversión pública en instituciones y políticas de seguridad. El aumento en los presupuestos nacionales, regionales y locales en seguridad es irrefutable y cubre déficits institucionales históricos, así como inversiones nuevas que buscan mejorar la calidad de la respuesta pública a los múltiples problemas de violencia e inseguridad. En muchos casos la inversión se ha desarrollado de forma desordenada y sin una

direccionalidad de política clara. De hecho, el análisis de intervenciones locales y nacionales de prevención y control del delito muestra la carencia

La preocupación ciudadana por la seguridad ha venido de la mano de más inversión pública en instituciones y políticas de seguridad.

de una política criminal que defina prioridades en la actuación de cada institución. Por el contrario, las contradicciones, las competencias e incluso las confrontaciones institucionales son parte del escenario institucional dedicado a prevenir y controlar el delito.

Respecto a la década previa se pueden mencionar algunos avances significativos:

- Las iniciativas de **prevención local del delito** son parte de las acciones que realizan prácticamente todas las instituciones.
- **La inversión en personal** ha aumentado. Aunque las carencias son todavía sustanciales, es notorio el esfuerzo por incrementar la dotación policial y fortalecer algunas capacidades de formación y entrenamiento.
- **La infraestructura judicial y policial** ha sido modernizada aunque la misma refleja las fuertes inequidades territoriales que marcan la vida de las tres ciudades capitales.

SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA

Quito y La Paz tienen observatorios del delito que han brindado información cada día más seria sobre las problemáticas de violencia e inseguridad. Los niveles de desarrollo de estos esfuerzos son diversos y han pasado por las vicisitudes que originan de la carencia de voluntad política sostenida en el tiempo. A pesar de esta realidad, es innegable la impronta que implica el desarrollo de una perspectiva de política que busca basarse en evidencia. En Lima no hay observatorio, pero diversos distritos de Lima Metropolitana han fortalecido sus programas de serenazgo (patrullaje local) vinculado con comandos de comando y control que incluye inversión en tecnología, principalmente de circuitos de televigilancia.

Más allá de estas iniciativas, los gobiernos nacionales de Ecuador y Bolivia se han comprometido con la inversión pública necesaria para desarrollar centros de control y prevención de la violencia y la criminalidad que incluyen un desarrollo tecnológico sustantivo. El ECU 911 desarrollado por el gobierno del Presidente Correa es considerado un ejemplo de cómo se pueden integrar múltiples sistemas de información que incluyen recursos policiales,

respuesta ante desastres naturales y control del tránsito, entre otros sistemas. La inversión pública ha sido sustantiva con un aproximado de 80 millones de dólares norteamericanos y se espera que tenga un impacto en los indicadores de gestión en diversas instituciones vinculadas con la prevención y el control de la violencia y la criminalidad. Esta iniciativa está siendo replicada en Bolivia con el plan de BOL 111 que está recién en sus fases iniciales.

En Perú no hay una iniciativa de la misma envergadura, y los procesos de inversión en observatorios como el del Ministerio Público son importantes pero aún incompletos debido a la carencia de una verdadera coordinación interinstitucional.

LAS NUEVAS VIOLENCIAS: MIGRACIÓN

Los migrantes aparecen como un nuevo actor de la violencia, o más bien como los culpables de la mudanza de ciertos tipos criminales a través de las fronteras. El aumento de la migración al interior de América Latina, así como la consolidación de mercados ilegales de tráfico de migrantes y trata de personas son fenómenos preocupantes. Cabe destacar que la migración es una problemática que tiene rostro de mujer en la mayoría de países que reciben a miles de mujeres que se trasladan como fuerza laboral y que tienden a mantener a sus familias en el lugar de origen y de destino. De esta forma se magnifican y reproducen las vulnerabilidades de las mujeres de sectores socioeconómicos bajos, que son muchas veces víctimas de violencia y discriminación en los lugares de destino.

Pero más allá de los procesos de migración laboral femenina, la migración se ha consolidado como un elemento evidente en las principales ciudades de los países andinos. Recientes encuestas de opinión reconocen altos niveles de desconfianza ciudadana hacia el migrante y la percepción general que muchos “traen” formas de desarrollo vinculadas a la ilegalidad e informalidad. Estos procesos van territorialmente acompañados por la formación de guetos dentro de las ciudades donde se instalan los migrantes, muchas veces con altos niveles de precariedad.

La vinculación narrativa entre migración y delincuencia está muy presente en la región y sin duda se convierte en un desafío para gobiernos que no han enfrentado la temática con la rigurosidad que se requiere y que muchas veces son actores de la violencia contra los migrantes.

CONCLUSIONES

Los aprendizajes son múltiples, pero quedan también interrogantes fundamentales no sólo sobre la caracterización de la violencia, la criminalidad y la inseguridad en Ecuador, Bolivia y Perú, sino también sobre su prospectiva. Los análisis desarrollados durante nuestro proyecto entregan luces iniciales sobre una temática que debería ser tema clave de espacios de intercambio de experiencias nacionales y regionales. Las tendencias de incremento de la presencia del crimen organizado, del control territorial incipiente pero sostenido por parte de grupos criminales, la diversificación de actividades delictuales y la debilidad institucional son ingredientes de una preocupante situación que podría empeorar si no se toman las decisiones de política necesarias.

El aumento de la violencia en los países andinos es un fenómeno innegable que debe ser tomado en consideración y enfrentado con rapidez. Para esto se requiere la consolidación de instancias de la sociedad civil y la academia dedicadas al desarrollo de investigación aplicada de la temática. También se torna urgente la presencia de liderazgos políticos sostenidos en el tiempo y con un compromiso sustancial con las tareas de reforma institucional, lucha contra la corrupción y definición de iniciativas de política basadas en evidencia. La construcción de seguridad es una tarea conjunta y requiere de la consolidación de espacios de debate y propuesta. Esperamos haber aportado en la búsqueda de una agenda especial para los países andinos y especialmente para sus ciudades capitales.

NOTA

1 Las relatorías de las reuniones de Quito y Lima se pueden acceder en: <https://www.wilsoncenter.org/article/violence-and-crime-major-andean-cities-characteristics-and-public-policies>.

SOBRE LA AUTORA

Lucía Dammert es socióloga y Profesor Asociado de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago de Chile. Ha trabajado en instituciones académicas en Estados Unidos, Argentina y Chile. Entre el 2005 y el 2010 se desempeñó como Directora del Programa Seguridad y Ciudadanía de FLACSO-Chile. Ha publicado artículos y libros sobre participación comunitaria, seguridad ciudadana, conflictividad social y temas urbanos en revistas nacionales e internacionales. En el plano de la gestión pública ha participado de programas de seguridad ciudadana en diversos países de la Región, trabajando como Jefa de la División Estudios del Ministerio del Interior de Chile y Jefa de Asesores del Subsecretario del Interior y Seguridad Pública de Chile. Ha realizado asesoría a diversos gobiernos entre los que destacan Argentina, Perú y México. Se desempeñó además como asesor experto en el Departamento de Seguridad Pública de la Organización de los Estados Americanos y como Consultor Banco Interamericano del Desarrollo, Banco Mundial, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y CAF, entre otros organismos regionales y multilaterales. Desde el año 2015 es Global Fellow del Wilson Center for Scholars. En el año 2017 fue invitada a ser parte del Consejo Asesor en Temas de Desarme del Secretario General de Naciones Unidas para el periodo 2017–2020 siendo la única representante de América Latina. Obtuvo su doctorado en Ciencia Política en la Universidad de Leiden, Holanda.

Mail: lucia.dammert@usach.cl



@LATAMProg



facebook.com/LatinAmericanProgram

www.wilsoncenter.org/program/LatinAmericanProgram

Woodrow Wilson International Center for Scholars
Latin American Program
One Woodrow Wilson Plaza
1300 Pennsylvania Avenue NW
Washington, DC 20004-3027



@AgendaCAF



facebook.com/CAF.America.Latina/

www.caf.com

CAF - Banco de Desarrollo de América Latina
Av. Eduardo Madero, No. 900
Edificio Catalinas Plaza, piso 9
C1106ACV, Ciudad de Buenos Aires
Argentina